

**Consejo de Seguridad**

Distr. general
27 de febrero de 2004
Español
Original: inglés

Carta de fecha 23 de febrero de 2004 dirigida al Presidente del Consejo de Seguridad por el Presidente del Comité del Consejo de Seguridad establecido en virtud de la resolución 1373 (2001) relativa a la lucha contra el terrorismo

Me dirijo a usted con referencia a mi carta del 2 de diciembre de 2003 (S/2003/1156). El Comité contra el Terrorismo ha recibido el tercer informe de Bélgica, que se adjunta, y que ha sido presentado con arreglo a lo dispuesto en el párrafo 6 de la resolución 1373 (2001) (véase el anexo). Le agradeceré que haga distribuir esta carta y su anexo como documento del Consejo de Seguridad.

(Firmado) Inocencio F. **Arias**

Presidente

Comité del Consejo de Seguridad establecido en
virtud de la resolución 1373 (2001) relativa a la
lucha contra el terrorismo



Anexo

**Carta de fecha 23 de febrero de 2004 dirigida al Presidente del
Comité contra el Terrorismo por el Representante Permanente
de Bélgica ante las Naciones Unidas**

[Original: francés]

Tengo el honor de transmitirle adjunto el tercer informe presentado por Bélgica en cumplimiento de la resolución 1373 (2001) del Consejo de Seguridad (véase el apéndice). En este informe se responden las preguntas formuladas en su carta de 21 de noviembre de 2003.

(Firmado) **Jean de Ruyt**
Embajador
Representante Permanente de Bélgica
ante las Naciones Unidas

Apéndice

[Original: francés/inglés]

Respuesta de Bélgica al tercer cuestionario del Comité contra el Terrorismo

1.1 El Comité contra el Terrorismo ha acordado hacer nuevas preguntas y observaciones para su consideración por el Gobierno de Bélgica en relación con la aplicación de la resolución, según se indica en esta sección.

1.2 Con respecto a la aplicación efectiva del apartado a) del párrafo 1 de la resolución, ¿puede Bélgica indicar al Comité contra el Terrorismo cuáles son las disposiciones de su legislación que obligan a las instituciones financieras a identificar a sus clientes y denunciar transacciones sospechosas a la Dependencia de Tratamiento de Información Financiera de Bélgica o a otras autoridades competentes?

Bélgica quiere señalar que recientemente se aprobó una ley, de fecha 12 de enero de 2004 por la que se modificó la ley contra el blanqueo de dinero de 11 de enero de 1993, a fin de incorporar a la legislación belga la segunda directiva europea contra el blanqueo de dinero, la directiva 2001/97/CE, así como las 40 recomendaciones nuevas y las ocho recomendaciones especiales del GAFI.

Las disposiciones que rigen la identificación de los clientes han quedado aclaradas en virtud de la modificación reciente y, en particular, prevén una vigilancia constante para asegurar que las operaciones efectuadas correspondan a la información que los declarantes tienen acerca de sus clientes, su perfil de riesgo y el origen de los fondos.

Mediante la incorporación de la directiva europea, en esta ley figuran ahora las disposiciones aplicables a las denuncias en casos de transacciones sospechosas que hay que hacer a la Dependencia de Procesamiento de Información Financiera (que es la dependencia que se menciona en la pregunta 1.2). En algunos casos definidos, los abogados quedan cubiertos por las disposiciones contra el blanqueo. Deben presentar sus denuncias al presidente del colegio de abogados al que pertenecen. Una vez que éste ha comprobado que esa denuncia se ajusta al marco legal que rige las obligaciones de los abogados, debe transmitir inmediatamente la información a la Dependencia de Procesamiento de Información Financiera.

¿Puede Bélgica indicar al Comité contra el Terrorismo cuáles son las penas que prevé la ley en caso de incumplimiento de las obligaciones sobre denuncias?

Las sanciones aplicables a los declarantes en caso de incumplimiento de las obligaciones contenidas en la ley del 11 de enero de 1993 son impuestas por la autoridad de control o de supervisión o la autoridad disciplinaria competente. Además de las sanciones de carácter general (censura, cancelación de la matrícula, etc.), esa ley prevé las dos sanciones especiales siguientes: la autoridad de control o de supervisión o la autoridad disciplinaria puede, por un lado, proceder a publicar las decisiones y medidas que adopta y, por la otra, puede imponer una multa administrativa por valor no inferior a 250 euros y no mayor a 1.250.000 euros.

En especial en lo que se refiere a la propuesta de incluir a los abogados en el ámbito de la legislación contra el blanqueo de dinero (véase la página 6 del informe complementario), el Comité contra el Terrorismo quiere saber si han entrado en vigor las nuevas disposiciones legales pertinentes.

La ley del 12 de enero de 2004 se publicó en el *Moniteur belge* del 23 de enero de 2004 y entró en vigor el 2 de febrero de 2004.

Se puede encontrar una versión consolidada de la ley en francés en el sitio de la Dependencia de Procesamiento de Información Financiera (www.ctif-cfi.be).

1.3 El Comité contra el Terrorismo sabe que el Consejo de Ministros de Bélgica ha preparado recientemente un nuevo proyecto de ley que incluye especialmente disposiciones relativas a una amplia variedad de delitos de terrorismo y que, al mismo tiempo, preserva los derechos humanos fundamentales. En este sentido, el Comité agradecerá recibir una descripción detallada del contenido de dicho proyecto e información sobre el proceso de su promulgación

El proyecto de ley fue aprobado el 19 de diciembre de 2003, se publicó en el *Moniteur belge* el 29 de diciembre de 2003 y entró en vigor el 8 de enero de 2004. Modifica los artículos del Código Penal que se mencionan a continuación.

Los artículos 137 a 141 del Código Penal definen los delitos de terrorismo, determinan las penas aplicables y definen el concepto de grupo terrorista y la participación en dichos grupos, además de la ayuda prestada para cometer un delito de terrorismo. El artículo 141 determina el campo de aplicación de estas disposiciones relativas al terrorismo. La financiación del terrorismo es ahora una infracción penal de fondo y el Código Penal vigente permite entablar proceso en caso de tentativa o de comisión de simples actos preparatorios.

Estas disposiciones contra el terrorismo no pueden limitar ni menoscabar el ejercicio de los derechos y las libertades fundamentales, tales como el derecho de huelga y las libertades de reunión, de asociación y de expresión, incluido el derecho a fundar sindicatos con otras personas y afiliarse a ellos en defensa de los intereses propios.

El texto de la ley se puede consultar en la Internet en el sitio siguiente: <http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/summary.pl>. (Hay que escribir la fecha de la ley y oprimir "Enter" y después elegir el título de la disposición que se quiere consultar.)

1.4 Con respecto a la aplicación efectiva del párrafo 1, el Comité contra el Terrorismo quiere recibir detalles sobre las disposiciones aplicables a las prácticas bancarias extraoficiales y las agencias de envíos de dinero alternativas que intervienen en las transferencias de fondos en Bélgica. Si esas disposiciones no existen, ¿puede Bélgica indicar las medidas que se propone tomar para dar pleno cumplimiento a esta disposición de la resolución?

En Bélgica los sistemas de transferencia de fondos extraoficiales están prohibidos. Las nuevas disposiciones de la ley del 11 de enero de 1993 amplían la aplicación del mecanismo preventivo a la detección de operaciones de blanqueo y de financiación del terrorismo vinculadas con la prestación de servicios de transferencia de fondos sin autorización. Además, esta misma ley prevé explícitamente la obligación de identificar a los clientes que quieren transferir fondos. Los organismos financieros competentes también deben conservar registros de todas estas informaciones cuando intervienen en una cadena de pagos en calidad de intermediarios.

1.5 Bélgica ha hecho referencia a disposiciones que contemplan la incautación y el decomiso de fondos de entidades benéficas que participan en la financiación del terrorismo. La aplicación efectiva del párrafo 1 de la resolución exige que se cree un mecanismo adecuado de vigilancia (que incluya, por ejemplo, requisitos de registro y auditoría) para asegurar que los fondos recaudados por organizaciones que tengan o digan tener objetivos de beneficencia, sociales o culturales no se desvíen para fines distintos de los declarados, en especial para financiar actos de terrorismo. En este sentido, el Comité contra el Terrorismo agradecerá recibir una descripción de las disposiciones legales y de los instrumentos administrativos que Bélgica ha establecido en este sentido

La libertad de asociación está consagrada en el artículo 27 de la Constitución y garantizada por la ley del 24 de mayo de 1921.

En lo que se refiere a las organizaciones de beneficencia, Bélgica quiere hacer referencia a la ley de asociaciones y fundaciones del 27 de junio de 1921, modificada por la ley del 2 de mayo de 2002 sobre las asociaciones sin fines de lucro, las asociaciones internacionales sin fines de lucro y las fundaciones.

El texto de la ley se puede consultar en la Internet en la dirección <http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/summary.pl>. (Hay que escribir la fecha de la ley y oprimir “Enter” y después elegir el título de la disposición que se quiere consultar.)

Las asociaciones sin fines de lucro tienen un expediente en el archivo del tribunal de comercio que contiene los elementos siguientes:

1. Los estatutos;
2. Las decisiones relativas al nombramiento y cese en el cargo del personal de dirección y, si corresponde, las personas encargadas de la gestión ordinaria de la asociación o habilitadas para representarla y los auditores;
3. El registro de los socios;
4. Las decisiones relativas a la disolución o liquidación de la asociación;
5. El balance anual;
6. El texto ordenado de los estatutos después de su modificación.

En el caso de las asociaciones sin fines de lucro grandes (que tienen más de 100 empleados o que cumplen dos de los tres criterios siguientes: 50 empleados, 3.150.000 euros de ingresos y 6.250.000 euros de balance), es obligatorio designar un auditor fiscalizador que sea miembro del instituto de auditores de empresas.

Además, se puede ejercer control asegurando el cumplimiento de las obligaciones fiscales, como la presentación anual de declaraciones correspondientes al impuesto sobre las personas jurídicas y el impuesto compensatorio de los derechos de sucesión.

En este contexto, se puede considerar que la Dependencia de Procesamiento de Información Financiera actúa como mecanismo de fiscalización. Esta Dependencia se ocupaba fundamentalmente de investigar los casos de blanqueo y mucho menos de la lucha contra la financiación del terrorismo. Es evidente que las organizaciones terroristas también son culpables de blanqueo de fondos procedentes de actividades delictivas, porque su financiación a menudo se basa en actividades ilegales (prostitución, tráfico de personas, drogas, falsificación de documentos, etc.). Gracias a la

modificación reciente de la ley, la financiación del terrorismo figura ahora explícitamente entre las atribuciones de la Dependencia en materia de investigación.

Por último, la Fiscalía tiene competencia en general para vigilar la actividad de las personas jurídicas.

1.6 En el informe complementario de Bélgica, el Comité contra el Terrorismo observa que los fondos, los activos financieros y los recursos económicos de las personas que cometen o intentan cometer o facilitan la comisión de actos terroristas en Bélgica o contra otros Estados sólo pueden ser congelados si esas personas son enjuiciadas o figuran en una lista preparada por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas o si se hace referencia a ellas en los reglamentos correspondientes de la Unión Europea. En este sentido, ¿puede Bélgica describir el contenido de las disposiciones legales o administrativas vigentes aplicables a la congelación de los bienes de terroristas y de organizaciones terroristas que no figuran en la lista o los reglamentos antes mencionados? En este sentido, el Comité contra el Terrorismo señala que es necesario que estén en vigor disposiciones legales que permitan la congelación de fondos, cualquiera que sea su origen, cuando:

- Se sospeche que están vinculados con el terrorismo, aunque aún no hayan sido usados para cometer un ataque terrorista;
- Estén vinculados con actividades terroristas que aún no hayan causado daños materiales

No hay disposiciones civiles o penales que permitan incautar bienes de presuntos terroristas o de organizaciones terroristas que no figuren en una lista aprobada o bien por las Naciones Unidas o bien por la Unión Europea. Sólo en el marco de una investigación judicial es posible proceder a incautar bienes que quizás estén vinculados con el terrorismo. Un juez en lo penal deberá pronunciarse sobre el destino que se ha de dar a esos bienes. Corresponde a las instituciones financieras la obligación de detectar los presuntos movimientos de capitales que puedan servir para financiar actos de terrorismo y tomar después las medidas que corresponden, a saber, transmitir esa información a la Dependencia de Procesamiento de Información Financiera y a la Fiscalía.

La ley del 11 de enero de 1993 prevé la posibilidad de que esa Dependencia, cuando la gravedad o la urgencia del caso lo justifiquen, impida una transacción si hay una denuncia previa de actividad sospechosa (es decir, el procedimiento normal).

En virtud de la ley del 12 de enero de 2004 el plazo durante el cual se puede impedir que la operación siga su curso ha sido ampliado de 24 horas a dos días. Si la Dependencia estima que la vigencia de esta medida debe prorrogarse, debe recurrir sin demora al Procurador de la Corona o al Procurador Federal, que tomarán las decisiones que correspondan.

Cabe recordar que, como se indicó en la respuesta a la pregunta 1.3 *supra*, en el marco de la ley contra los actos de terrorismo del 19 de diciembre de 2003, es posible “entablar proceso en caso de tentativa o de comisión de simples actos preparatorios”. Esto se aplica en particular a la financiación del terrorismo que puede dar lugar a la adopción de medidas de congelación de fondos (más exactamente, de incautación precautoria). Una medida de esa índole es de competencia del juez de instrucción, que debe decidir considerando cada caso en particular.

1.7 Con respecto a la aplicación del apartado a) del párrafo 2 de la resolución, ¿puede Bélgica indicar qué sanciones hay para los casos en que se infringe la legislación belga aplicable a la fabricación, venta, posesión, almacenamiento, importación, exportación y transporte de armas y explosivos en su territorio?

Bélgica no tiene nada que agregar a la respuesta sobre este tema que figura en las páginas 7 y 8 del documento en que se responde al segundo cuestionario del Comité contra el Terrorismo.

Cabe recordar que las sanciones indicadas son una multa de 100 a 10.000 euros y reclusión de un mes a tres años. Si se trata de armas prohibidas, estas son decomisadas. Si hay una reincidencia de profesionales en un plazo de dos años, es posible proceder a la clausura de la empresa.

1.8 El Comité contra el Terrorismo observa que no hay en el Código Penal de Bélgica disposiciones especiales que tipifiquen el reclutamiento de miembros de grupos terroristas. En este sentido, el Comité desea que se le informe acerca de las medidas que Bélgica se propone tomar para dar pleno cumplimiento a este aspecto de la resolución.

Los nuevos artículos 139, 140 y 141 del Código Penal definen el concepto de grupo terrorista, así como la participación en tales grupos y la ayuda prestada para cometer un delito de terrorismo. Lo que se contempla precisamente es el suministro de información o de recursos materiales a grupos terroristas y todas las formas de financiación de organizaciones de ese tipo. De ello surge que el reclutamiento de terroristas es un delito penal.

Conviene recordar que, en lo que se refiere al reclutamiento de mercenarios (en la medida que éstos pueden ser asimilados a terroristas) para prestar servicios en el extranjero, Bélgica cuenta con la ley del 1º de agosto de 1979 relativa a la prestación de servicios en un ejército o contingente extranjero en el territorio de un Estado extranjero.

1.9 Bélgica indica que sus tribunales no tienen competencia respecto de un nacional extranjero acusado de haber cometido un acto terrorista en el exterior. En ese caso, ¿cómo procedería Bélgica con un extranjero que está en Bélgica y del que se sospecha que ha cometido un acto terrorista en el exterior? ¿Aplicaría Bélgica en esas circunstancias el principio del derecho internacional “juzgar o extraditar” (*aut dedere aut judicare*)?

Además de la competencia jurisdiccional territorial clásica, el derecho belga prevé, en su nueva ley, la competencia personal activa en lo que se refiere a los nuevos delitos terroristas. Bélgica ha previsto también su competencia jurisdiccional en lo relativo a los delitos por terrorismo cometidos en el extranjero por no belgas, pero únicamente cuando esos delitos han sido cometidos contra un residente o una institución belga, contra una institución de la Unión Europea o contra un organismo creado en virtud del tratado de la Comunidad Económica Europea o de la Unión Europea y que tiene sede en el Reino.

Por último, en todos los casos en que un tratado internacional de lucha contra el terrorismo que Bélgica ha firmado obliga a los Estados partes a ampliar su competencia extraterritorial, el artículo 12 del título preliminar del Código de Procedimiento Penal incorpora automáticamente a la legislación esas nuevas atribuciones.

1.10 y 1.11 ¿Puede Bélgica indicar si la legislación vigente prevé la extradición y la asistencia mutua sobre la base de la reciprocidad o sobre la base de acuerdos internacionales únicamente? Indíquese si, en los casos en que se deniega la solicitud de extradición de un presunto terrorista, Bélgica aplicará el principio de derecho internacional “aut dedere aut judicare”. En especial, el Comité contra el Terrorismo quiere recibir información sobre las medidas que Bélgica tomaría respecto de un nacional extranjero cuya extradición no se haya concedido por haberse considerado que el delito en cuestión posiblemente fuera un “acto político o un acto afín”.

El Comité desea recibir información sobre las medidas legales o de otra índole que permiten que las autoridades belgas presten asistencia en las investigaciones penales y los procesos judiciales, según lo previsto por la resolución. ¿Hay en Bélgica una ley que contemple la asistencia mutua en las investigaciones penales y los procesos judiciales? ¿Puede Bélgica indicar qué disposiciones hay en materia de asistencia jurídica mutua en general y, más en particular, en lo que se refiere a las solicitudes de congelación, incautación y decomiso de bienes o valores?

No hay ninguna convención referida específicamente al terrorismo y que obligue a Bélgica que incluya, como sucede en materia de estupefacientes, disposiciones que ofrezcan una base autónoma que permita conceder la extradición, aparte de los convenios bilaterales o multilaterales de extradición.

Sin embargo, la extradición por actos de terrorismo es posible en virtud de la Convención europea de extradición del 13 de diciembre de 1957, del Tratado de extradición y cooperación judicial del Benelux del 27 de junio de 1962 y de tratados bilaterales de extradición que contemplan penas mínimas (por ejemplo, el Convenio de extradición entre Bélgica y los Estados Unidos de 27 de abril de 1987).

La gran mayoría de los tratados bilaterales de extradición de los que Bélgica es parte prevén muchas infracciones, pero en ellos no se recoge el concepto de terrorismo.

1.12

La decisión marco sobre la definición de actos terrorista ha quedado incorporada en el derecho belga en virtud de la ley del 19 de diciembre de 2003, ya mencionada en la respuesta a la pregunta 1.2. De esta forma, las penas previstas en la legislación belga para los delitos de terrorismo han quedado armonizadas con las normas internacionales

En lo que se refiere a la ratificación del Convenio para la represión de la financiación del terrorismo internacional, el trámite legislativo ya está terminado y el parlamento (la cámara y el senado) aprobó su texto. Sólo falta autenticar las firmas de los ministros competentes en la ley y en el instrumento de ratificación, así como la firma del Rey, para proceder luego al depósito del instrumento de ratificación en las Naciones Unidas, en Nueva York. De todos modos, corresponde recordar que la ley del 19 de diciembre de 2003 permite aplicar en territorio belga el Convenio en su totalidad, porque la decisión marco, en la que la ley se basa, coincide en gran medida con el Convenio.